

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N.º 1

Ejecución de títulos judiciales n.º 8/2010

Recurso de Apelación 96/2006 dimanante del P.A. 270/2005 del Juzgado C.A. n.º 1 de Gijón

María de los Ángeles García Suárez, en nombre y representación de la Asociación de Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón (AFAG), según tengo acreditado en los autos del recurso contencioso administrativo n.º 270/2005 P.A., en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 8/2010 por mí interpuesto, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda, DIGO:

Que se me ha dado traslado de providencia de fecha 25 de septiembre de 2010, por la que se nos concede plazo de cinco días para alegaciones en relación con el escrito y documentos presentados por el Procurador Sr. Villa Álvarez en representación del Ayuntamiento de Gijón. A tal efecto dentro del plazo concedido realizamos las siguientes

A L E G A C I O N E S

Primera.- Esta parte ha tenido conocimiento a través de referencia bancaria, de que con fecha 20 de septiembre de 2010 se ha procedido al ingreso en la cuenta corriente que mi representada tiene en Cajastur, de la cantidad de 328,45 euros correspondientes a costas judiciales. Consecuentemente, de conformidad con lo previsto en el artículo 583.2 de la LEC procede la imposición de costas generadas en este incidente, y ello porque el pago realizado a consecuencia del requerimiento no es óbice para que sean a cargo del deudor todas las costas conforme se prevé el artículo citado; máxime cuando esta parte en aras de facilitar el pago requirió, una vez hubo transcurrido el plazo de espera que la ley prevé para la ejecución, a Don Fernando [REDACTED] a través de su legal representante, para el abono de las costas judiciales obteniendo la negativa y el silencio por respuesta. Tampoco es posible aceptar que el deudor, que lo es una persona física y no una Administración, tenga que realizar operaciones de ejecución presupuestaria que justifiquen el retraso y la negativa al pago del mismo, pues bien pudo pagar y después cobrar según permiten, al parecer, los inoportunos, por escandalosos, documentos añadidos a esta causa por el Ayuntamiento de Gijón. En todo caso, ni el deudor ha comparecido en este procedimiento, ni ha justificado causa alguna que le haya impedido efectuar el pago antes de que esta parte promoviera la ejecución.

Finalmente, respecto a la comparecencia en este procedimiento del Ayuntamiento, entendemos que el mismo carece de legitimación pasiva en el asunto al carecer de interés legítimo, dado que el presente procedimiento de reclamación de cantidad se dirigió contra el deudor condenado en costas, Don Fernando [REDACTED], que era quien había planteado el incidente de nulidad de actuaciones desestimado por Auto del TSJ de fecha 6 de febrero de 2007, que le condenó al pago de las costas.

Segunda.- De conformidad con el artículo 576 LEC, la cantidad adeuda devengó un interés legal incrementado en dos puntos. En este sentido, transcurrido el plazo de espera desde la notificación del auto, a que se refiere el artículo 548 LEC tendríamos que la liquidación de intereses abarcaría el período comprendido entre el 17 de mayo de 2010 hasta el 20 de septiembre de 2010, a un interés del 6 %, y daría unos intereses de 6,86 €.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, tenga por realizadas las alegaciones que anteceden y en consecuencia con las mismas, una vez se ha procedido al pago del principal, dicte resolución por la que resuelva condenar al deudor, Don Fernando ~~XXXXXXXXXX~~, al pago de los intereses devengados por importe de 6,86 €, con expresa imposición de las costas devengadas en este procedimiento de ejecución por imperativo legal.

Es Justicia que pido en Gijón, a 14 de octubre de 2.010.

OTROSÍ DIGO: Que dado que las actuaciones llevadas a cabo en este procedimiento de ejecución, puestas de manifiesto por la documentación remitida por el Ayuntamiento de Gijón, pudiera ser constitutiva de un presunto delito de malversación o fraude previsto en el Código Penal, esta parte considera oportuno solicitar se dé traslado de la referida documentación al Ministerio Fiscal a los efectos oportunos.

En su virtud,

Nuevamente **SUPLICO AL JUZGADO**, tenga por realizada la anterior manifestación, y de conformidad con la misma dese traslado al Ministerio Fiscal de la documentación remitida por el Ayuntamiento de Gijón.

Es justicia que reitero en el mismo lugar y fecha.

Lda. M^a de los Ángeles García Suárez.

COPIA

15 OCT 2010

52520

Don Carlos Rodríguez González, Secretario de organización de la Asociación de Funcionarios del Ayuntamiento de Gijón (AFAG), actuando como Secretario de su Comisión Gestora CERTIFICO que:

La Comisión Gestora de la AFAG, en su reunión del día 13 de octubre de 2010, aprobó trasladar a la Alcaldía la siguiente moción que literalmente transcribo:

"Con ocasión de la reclamación del pago de unas costas generadas a favor de la AFAG en el recurso de apelación 96/2006, hemos podido comprobar cómo el Ayuntamiento se ha hecho cargo de las mismas ingresando la cantidad reclamada en nuestra cuenta corriente, pese a que el obligado al pago de las mismas resultaba ser el funcionario municipal Don Fernando ~~Alvarez~~. Incluso, según documentación que el Ayuntamiento ha incorporado al procedimiento de ejecución de títulos 8/2010 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Gijón, iniciado para el cobro de las costas a las que había sido condenado el funcionario, el propio Ayuntamiento también se hizo cargo del pago de los honorarios del abogado defensor del funcionario, hecho que al parecer actualmente se viene repitiendo en el caso de que se impugne algún procedimiento de selección, y para el supuesto de que el funcionario que obtuvo la plaza comparezca en el recurso como codemandado.

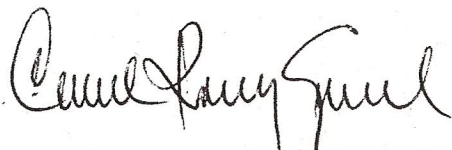
Frente a estos hechos de generosidad impropia con algunas personas, el resto de los funcionarios observamos mes tras mes, como nuestras nóminas sufren, con una interpretación generosa por parte del Ayuntamiento, los recortes que el Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo estableció, haciendo que el esfuerzo exigido sea más gravoso a unos que a otros que ven como se les complementa su retribución, con la asunción por parte del Ayuntamiento de sus gastos privados.

No deja de sorprender que en aras de la legalidad se adopten posturas extremas en la interpretación del Real Decreto Legislativo 8/2010, y que por otro lado se destinen caudales públicos al pago de usos ajenos a la función municipal, beneficiando así a terceras personas, a las cuales con ello, igualmente, se les retribuye al margen de la legalidad vigente.

Por todo ello venimos a requerir de esa Alcaldía que se adopten las medidas adecuadas para reintegrar a la caja pública el importe de lo distraído, y para evitar que en el futuro se puedan dar situaciones similares a las denunciadas.

Igualmente, solicitamos se nos informe de las medidas que, en su caso, tenga a bien adoptar."

En Gijón, a 14 de octubre de 2010.



Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Gijón